



¿TIENE FUTURO EL SOCIALISMO EN OCCIDENTE?

Alec NOVE

En *La economía del socialismo factible** he argumentado que las ideas de Marx sobre el socialismo eran utópicas o erróneas, cuando no ambas cosas. Las presunciones sobre la conducta humana, ligadas a una abundancia inalcanzable, eran ilusorias, como también lo era la idea de «superar» la división del trabajo. La concepción del «proletariado» como «sujeto colectivo de la emancipación de la humanidad en general» debe tacharse de romántica, en tanto que la «dictadura del proletariado» no es sino un imposible.

Pero aún es más importante el hecho de que ni Marx ni sus seguidores consiguieran comprender la inevitable complejidad de la economía moderna y creyeran, como lo expresó Engels con una frase célebre, que «todo será sencillo sin este supuesto valor»; como por arte de magia, los «productores asociados» reemplazarían el mercado por un debate entre camaradas, donde el trabajo sería «directamente social» y

no se produciría en función del mercado sino de unas necesidades conocidas de antemano.

Sin duda, Marx no imaginó nada semejante al estalinismo ni al modelo de planificación central que desarrolló la Unión Soviética. Se cuenta que un miembro de la policía secreta estalinista le dijo a un compañero: «Si Marx cayera en nuestras manos, en una semana le haríamos confesar que era agente de Bismarck». No es éste el lugar para recapitular los muchos defectos, de sobra conocidos, del sistema económico soviético, defectos que le han llevado a la quiebra absoluta en los últimos tiempos. Muchos de ellos están ligados de algún modo a lo que podría denominarse *deseconomías de escala*. Las expectativas de Marx y Lenin se vieron defraudadas, pues sustituir el mercado por la planificación resultó ser una tarea en extremo complicada, que requirió crear una enorme burocracia. La falta de un sistema de precios racional impedía a los burócratas-planificadores realizar elecciones económicas. Elaborar un plan desagregado y verificado en todos sus aspectos habría sido, según el académico Fedorenko, una labor de 30.000 años, y eso con ayuda de la informática. La planificación basada en toneladas, metros, unidades y rublos resultaba en una producción que ni siquiera satisfacía a los planificadores y en la que se estimulaba el derroche intencionado de materiales de producción. Un sistema productivo de esta índole es una solución razonable en una economía de guerra, cuando las prioridades del momento imponen la necesidad de prescindir del mercado y concentrar el control de los recursos en manos del gobierno. Sin embargo, en épocas de normalidad, cuando las prioridades son variadas, la eficacia es un factor insoslayable. La realidad era, no obstante, que con harta frecuencia el sistema centralizado de distribución de recursos se basaba en la influencia relativa de burócratas que perseguían sus propios intereses. Por otro lado, buena parte del poder se concentró en manos del aparato del Estado y del Partido, lo que, como es lógico, fomentó el abuso de poder. Durante el prolongado mandato de Brézhnev se aceleró la decadencia del sistema y los organismos de coordinación centrales se debilitaron; los ministerios y otros grupos burocráticos de interés se convirtieron en una suerte de «principados feudales». Se descuidaron las necesidades de los consumidores, el proceso de innovación se ralentizó, y el estancamiento y la corrupción originaron una crisis de confianza en el sistema. Gorbachov, consciente de toda esta problemática, se lanzó a realizar reformas radicales.

El fracaso de la reforma. ¿No existe la «tercera vía»?

Pero las reformas de Gorbachov no han alcanzado el éxito, y ahora se cierne sobre la antigua Unión Soviética la amenaza de un caos total. No sería difícil enumerar muchos de los motivos del fracaso y analizar los errores cometidos, aunque no me detendré a hacerlo en este artículo. Sí quiero subrayar, sin embargo, que este fracaso ha llevado a que en Europa Occidental y Oriental muchos se apresuraran a

extraer la conclusión de que no existe la tercera vía y de que el socialismo de mercado (incluida la versión que esboqué hace ocho años en *La economía del socialismo factible*) no es una alternativa viable. Aunque el año pasado un titular del *Boston Globe* expresara la idea de que «para rechazar a Lenin no es necesario aceptar a Milton Friedman», eso es exactamente lo que está sucediendo. El último número de la publicación económica mensual de Novosibirsk, *EKO*, entona un canto de alabanza a Friedman, aceptando incluso su argumento de que la Gran Depresión de 1929-1933 debe atribuirse a un error de la política económica gubernamental y fue motivada por la contracción de la oferta monetaria. Margaret Thatcher sigue siendo la mujer más popular de Rusia, muy por encima de Madonna. Y son muchos los que han realizado la transición de la economía política marxiana a la de la escuela de Chicago con una celeridad portentosa; para ellos, el objetivo es llegar al capitalismo por el camino más corto.

Antes que en la Unión Soviética, ya había ocurrido algo muy semejante en la Europa del Este. Un factor importante fue el fracaso de las «nuevas técnicas económicas» húngaras, cuya orientación era explícitamente la de un socialismo de mercado. Tampoco se analizarán en este artículo las complejas causas de ese fracaso. Me limitaré a hacer constar el hecho de que en la Polonia de Balcerowicz, en la Checoslovaquia de Klaus, y también en Hungría, no sólo se ha rechazado por completo el socialismo de mercado en todas sus formas, sino que ni siquiera se ha optado por un capitalismo del bienestar semejante al de Escandinavia o, incluso, al de Alemania. En Praga pude ver cómo se despreciaba el concepto de un *soziale marktwirtschaft* («economía social de mercado») debido a las suspicacias que despierta el término *social*. En todos los países del Este se está dando prioridad a la privatización, pues se considera que el mercado y la competencia sólo resultan efectivos en una situación de predominio de la propiedad privada. Ya nadie defiende las antiguas ideas favorables a la autogestión de los trabajadores y a la propiedad cooperativa. Pero la «mercantilización» adoptada como terapia de choque ha sido un proceso costoso, en especial en Polonia, donde el PNB y el nivel de vida han caído en picado. El objetivo parece ser una especie de «capitalismo sin capital ni capitalistas», que intenta alcanzarse mediante un proceso de recorte de las funciones estatales, que incluso afecta a áreas como el control de la contaminación y la creación de la infraestructura necesaria. A la par que el desempleo crece a grandes pasos, se confía a las fuerzas del mercado la apremiante tarea de reestructurar el capital, sin arbitrar ninguna estrategia de inversiones, pues la mera mención de este término conjura imágenes del desacreditado sistema de planificación central. Sin embargo, la evidencia demuestra que la intervención estatal en la política de inversiones puede ser muy valiosa, como lo ha sido, por ejemplo, en Corea del Sur y en la Europa Occidental de las primeras décadas de la posguerra. Esto no impide que el *laissez-faire* esté en boga y que la palabra «socialismo» haya caído en el

mayor descrédito por estar asociada a la planificación de tipo soviético.

El socialismo occidental se bate en retirada. La ascensión del neoliberalismo

La palabra «socialismo» tampoco está de moda en las democracias occidentales. El hundimiento de la variedad marxista-leninista del «socialismo» no debería haber afectado a los socialdemócratas de Occidente, la mayoría de los cuales venían criticando severamente el socialismo soviético desde hacía largo tiempo. Sin embargo, la desintegración de la Unión Soviética ha tenido profundos efectos en los partidos comunistas occidentales; algunos, como el italiano, han optado por ofrecer una nueva imagen con un nombre totalmente diferente, en tanto que otros, como el de Francia, están hundiéndose sin arriar la bandera roja. Sea como fuere, la inspiración y las ideas originales de los partidos socialistas de muchos países occidentales habían estado sujetas a fuertes críticas desde mucho antes del colapso del comunismo «del Este». Aunque en Francia y España —y más recientemente en Australia y Nueva Zelanda— los partidos que se autodenominan «socialistas» hayan conseguido formar gobierno, su actuación difiere poco de la de otros partidos. Para empezar, han renunciado al propósito de seguir una política de nacionalizaciones exhaustiva, hasta el punto de que en algunos sectores la tendencia ha sido la opuesta. En Gran Bretaña, el Partido Laborista no consiguió beneficiarse de las oportunidades creadas por el extremismo thatcheriano, porque tardó demasiado en desembarazarse de los elementos impopulares de su ideología cuasi-socialista. Ahora, se encuentra en buena posición para enfrentarse a los conservadores, pero sólo podrá hacerlo después de haber librado una batalla con su propio sector izquierdista.

Entretanto, el neoliberalismo ha conseguido notables conquistas. Los partidos de esta tendencia varían mucho de un país a otro. Los democristianos alemanes, y sus homólogos de Escandinavia y Holanda, aceptan los principios del Estado del bienestar. Merece la pena recordar que las grandes mejoras de los servicios sociales y la seguridad social de, por ejemplo, Francia y Alemania, no se debieron tanto a los gobiernos de izquierdas como a los de Erhard y Adenauer, De Gaulle y Pompidou. En el continente no se conoce un extremismo comparable al del gobierno de Thatcher, que ha llegado a privatizar monopolios naturales como el del agua y a dismantelar el sistema público de transporte urbano con maniobras ideológicas. Sería de enorme interés sociológico analizar por qué el extremismo ha tenido tal impacto en Gran Bretaña. El conservadurismo thatcheriano tiene dificultades a la hora de encontrar un lenguaje común con, por ejemplo, los democristianos alemanes, quienes nunca soñarían con dismantelar el transporte público de Munich o Dusseldorf.

No puede negarse que el pensamiento neoliberal ha desplegado una gran ofensiva en un momento en que la izquierda estaba sumida en la incertidumbre y a la defensiva. ¿A qué puede atribuirse este hecho?

Uno de los motivos es el desencanto provocado por las nacionalizaciones, que se efectuaron de un modo ineficaz, sin participación real de los trabajadores y sin prestar la debida atención a las necesidades de los consumidores. En Gran Bretaña, cuando menos, los sindicatos del sector público —como los del privado— han tendido a defender sistemas de trabajo obsoletos y que requieren un exceso de mano de obra. Esta estrategia sólo ha servido para perjudicar a la industria nacional y desacreditar al Partido Laborista, muy ligado a los sindicatos. Las viviendas sociales, por ejemplo, se administraban en general de una manera excesivamente burocrática, recurriendo a una normativa fastidiosa y sin sentido («Prohibido tener perros y gatos», «Se prohíbe pintar las puertas de rojo»). Ante la evidente y apremiante necesidad de modernizarse, el laborismo ha sufrido diversas escisiones (por ej., la formación de un partido socialdemócrata), lo que ha contribuido al desprestigio de la izquierda ante los votantes.

Los neoliberales, por el contrario, tenían una ideología en la que creían fervientemente: las fuerzas del mercado deben dejarse en libertad, y no hay razón para que el Estado interfiriera en los procesos económicos naturales que, por sí solos, generarán el equilibrio y la situación óptima de la que habla Pareto y los libros de texto inspirados en la escuela de Chicago. Margaret Thatcher y sus asesores estaban convencidos de la bondad de sus ideas cuando la izquierda todavía andaba a la busca de nuevas fuentes de inspiración. El monetarismo parecía ser la solución para la inflación crónica. El desempleo desaparecería en caso de que se mantuviera una política salarial flexible y con contención de los costes. La economía política «neoclásica» defendía la doctrina de la ineficacia económica de la actuación estatal, Friedman postulaba que la acción gubernamental acarrea más problemas que beneficios, y la teoría de la «elección pública» de Buchanan afirmaba que los funcionarios públicos casi siempre sirven a sus propios intereses o a los de alguna camarilla poderosa. Todas estas tendencias se inspiraban en el individualismo metodológico, cuya esencia fue resumida por Thatcher en estos términos: «La sociedad no existe». En Estados Unidos los pensadores neoliberales fueron aún más lejos. Tal como lo expresó uno de ellos —con indudable sentido del humor—, están convencidos de que el papel del Estado debe limitarse a la defensa nacional y a la construcción de carreteras, aunque algunos tengan sus dudas en lo que se refiere a las carreteras. Existe también una especie de liberales-anarquistas, con quienes incluso es necesario negociar la instalación de alumbrado público por cuenta del sector público.

El reaganismo-thatcherismo resulta atrayente a una proporción considerable de las capas mejor situadas de la clase trabajadora. Por

un lado, los trabajadores de «cuello blanco» están superando numéricamente a los de «cuello azul» en la mayoría de los países occidentales. Por otro, tal como Joan Robinson comentó en una ocasión, el «nada tenéis que perder salvo vuestras cadenas» funciona mejor como eslógan revolucionario que «nada tenéis que perder salvo vuestra casa, vuestro coche, vuestras vacaciones anuales en la Costa Blanca...». Miles de *trabajadores* pasan dos semanas de vacaciones en Florida (los vuelos de Manchester a Disneylandia siempre están completos). Rebajar los impuestos, recortar los servicios públicos y no prestar atención a las necesidades de la clase desfavorecida, todavía numerosa aunque minoritaria, son elementos de un programa inherentemente anti-socialista pero de algún modo «populista» e interesante desde el punto de vista electoral. Cabe decir otro tanto del racismo, en un momento en que los pobres del Tercer Mundo y de los antiguos países comunistas están intentando trasladarse al próspero Occidente.

Los valores socialistas tradicionales, que en Gran Bretaña cuentan con defensores como Tony Benn, son un lastre electoral; Kinnock así lo ha comprobado. Pero, ¿dónde queda el «socialismo» en el programa de Kinnock y en los programas «socialistas» de otros muchos países? ¿Qué puede considerarse «socialismo» a fines del siglo XX?

En mi libro intentaba definir el socialismo como una sociedad donde la mayoría de los medios de producción son de propiedad pública o social, y donde, a la vez, existe un sector privado importante, y el mercado y la competencia desempeñan una función básica en todas las esferas donde su actuación no resulta poco deseable (por ej., la medicina) o imposible (por ej., los «monopolios naturales» y las actividades sujetas a fuertes influencias de factores externos).

Pero, ¿qué proporción de la población de cualquier país occidental estaría dispuesta a apoyar la creación de una sociedad socialista de este tipo? Dado que un «socialismo» impuesto y antidemocrático representa una contradicción terminológica, es obvio que el apoyo popular es un elemento primordial. Pero incluso los socialdemócratas suecos, a quienes se debe en parte el Estado del bienestar y el pleno empleo, han perdido recientemente la mayoría electoral. De hecho, ni siquiera yo mismo apoyaría plenamente una política encaminada a implantar el «socialismo» tal como lo he definido. Por eso, en la introducción de mi libro decía que debe considerármese un «abogado» del socialismo en la acepción jurídica de la palabra «abogado», es decir, alguien dispuesto a defender a su cliente aunque no esté totalmente convencido de su inocencia.

¿Cuál es, entonces, el futuro del socialismo, definido como lo he hecho más arriba, o redefinido de cualquier otro modo?

Ante todo, para cualquier persona que viva en Gran Bretaña, es importante diferenciar la defensa de las ideas socialistas de la crítica a los excesos del thatcherismo. Estos pueden también atacarse desde una perspectiva favorable a una sociedad saneada con libertad de mercado. La idea, tan generalizada en la Europa del Este, de que la década de Thatcher frenó o incluso invirtió el declive industrial de Gran Bretaña es un mito, un punto de vista totalmente infundado. El «reinado» de Thatcher se caracterizó por el descuido de la infraestructura, los recortes en las ayudas a la investigación científica y a la formación técnica, unos tipos de interés reales tan elevados como nunca se habían conocido y unas inversiones productivas excepcionalmente bajas. Lo que ha dado en denominarse el *boom* de la segunda mitad de la década de los 80 fue un alza del consumo, los servicios financieros, el comercio al por menor y la construcción de edificios de oficinas, que provocó un aumento inflacionista de los créditos y el mayor déficit comercial de la historia británica. Los asesores de Thatcher combinaban la firme creencia en el *laissez-faire* con un individualismo metodológico exacerbado. Para ellos, el todo no es sino la suma de las diferentes partes. Así, por ejemplo, a su juicio el *sistema* de transportes no existe, pues el autobús n.º 22 y la línea de metro n.º 5 se conciben como empresas separadas orientadas a la obtención de beneficios. Incluso con respecto a la universidad el planteamiento es el mismo, pues los diferentes departamentos se evalúan por separado en tanto que «centros de costes», lo que destruye la coherencia del sistema universitario. La sanidad y la educación, como la producción de energía eléctrica, también responden a un modelo fragmentario, donde ya nadie se hace responsable de atender la demanda futura. Este tipo de miopía no ha afectado a Francia ni a Alemania, y confío en que tampoco a España. Adam Smith es uno de los pilares del pensamiento de la derecha, pero su ideología no le impedía ser consciente de lo que ahora se llaman «externalidades». Así pues, escribía en *La riqueza de las naciones*: Las autoridades públicas deben intervenir en la «construcción y mantenimiento de determinadas obras e instituciones públicas que en ninguna circunstancia podría interesar construir ni mantener a un individuo o a un pequeño grupo de individuos, porque los beneficios nunca llegarían a compensar los gastos, aunque muchas veces compensarán con creces a la sociedad».

Puede parecer extraño que se cite a Adam Smith para defender la idea de que no sólo debe prestarse atención a los intereses individuales, sino también a los sociales. Será extraño, pero no original. Alec Macfie, que fuera profesor de economía política en Glasgow, señaló en su día que muchas de las ideas de Adam Smith coincidían con el fabianismo. La otra gran obra de Smith, *Teoría de los sentimientos morales*, analiza con gran detenimiento las normas de la conducta so-

cial, en cuyo marco se desarrolla la actividad de los empresarios orientada a obtener beneficios. Sin duda, Smith habría respaldado la opinión de Schumpeter de que «ningún sistema social puede funcionar si se basa exclusivamente en una red de contratos establecidos libremente entre partes jurídicamente iguales y en la que el único objetivo que guía a todos son los intereses utilitarios a corto plazo». Friedman afirma que cualquier contrato establecido libremente debe beneficiar a ambas partes contratantes. No cabe duda, pero es fácil pensar en mecanismos institucionales que incluso Friedman consideraría injustos. Supongamos que existiera el *jus primae noctis*, y que un vasallo que aspirase a casarse tuviera que obligarse mediante contrato a pagar una cantidad a su señor para que éste renunciara a su derecho; hay que rizar el rizo para llegar a la conclusión de que un contrato en esos términos beneficia a ambas partes. Poniendo un ejemplo más común, imaginemos que la mayor parte de las tierras de una comarca pertenecen a latifundistas absentistas que las heredaron de sus antepasados, y que cualquiera que desee utilizar las tierras para cualquier propósito debe pagar a los latifundistas. Una vez más, ambas partes se benefician, según los mecanismos institucionales y de propiedad establecidos. Con todo, no dejan de ser mecanismos muy cuestionables.

El ideario socialista evitaría los abusos del sistema hereditario, así como las desigualdades de renta exageradas, a la vez que reconocería la necesidad de que existan incentivos materiales para el trabajo y para la actividad empresarial. En realidad, algunos de los ejemplos más notorios del exceso de rentas nada tienen que ver con la actividad empresarial. Por ejemplo, *The Times* (23 de abril de 1991) citaba el caso de un alto ejecutivo de United Airlines que se había concedido a sí mismo un sueldo de 18 millones de dólares en 1990, año en que los beneficios de la empresa descendieron en un 73%; ese sueldo era 1.300 veces superior al de las azafatas de la compañía, cuyos salarios llevaban congelados cinco años. Incluso «los accionistas con mayores participaciones en las empresas americanas están preocupados por los sueldos de los ejecutivos». Este abuso no benefició a los propietarios, múltiples y anónimos, sino a un representante que debería haberse dedicado a «maximizar» los *beneficios* de la empresa. También resulta curioso que los directivos de las empresas públicas británicas que se han privatizado se concedieran enormes aumentos salariales en cuanto se realizó la privatización. Esta conducta no concuerda con los postulados de Buchanan y de los teóricos de la «elección pública», en cuya opinión los directivos dispondrían de mayores ventajas en el sector público.

El siguiente punto de mi lista de preocupaciones socialistas sería el área de las externalidades. Me refiero a las áreas y actividades, donde la evaluación separada de las cuentas de pérdidas y ganancias lleva a crearse una imagen falsa de la situación. En este campo, el intervencionismo estatal sería beneficioso tanto para la economía como para

la sociedad (aunque deba reconocerse que la intervención siempre tiene costes; en especial, la falta de flexibilidad de la burocracia y, en algunas sociedades, la corrupción). En primer lugar, habría que encarar el problema creciente de la contaminación, de la ecología. El individualismo metodológico es un paradigma totalmente irrelevante cuando la destrucción de las selvas de Brasil puede afectar al clima mundial, las emisiones nucleares de Chernobil afectan a la cría de ovejas en Gales, y las emisiones de las centrales eléctricas británicas destruyen los bosques de Escandinavia. En estos casos, se impone la necesidad de una acción conjunta por parte de las autoridades públicas en defensa de la *sociedad*. Aunque también deba reconocerse que parte de los problemas de contaminación más alarmantes han sido el resultado de las acciones de los Estados comunistas, el *laissez-faire* no contribuirá a mejorar la situación. Y aún debe plantearse un problema de alcance más amplio, que podría dar lugar a una especie de «socialismo verde». Me refiero al hecho de que una sociedad individualista consagrada a estimular las necesidades mediante la publicidad, tal vez no tarde en verse enfrentada a la disminución de los recursos básicos, incluidos el aire y el agua.

El tercer punto sería el papel de las autoridades en tanto que proveedoras de infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, alcantarillado. La mayoría de estos servicios son responsabilidad del sector público incluso en Estados Unidos, aunque no estén libres de la amenaza del individualismo a ultranza, contrario al sistema impositivo, es decir, del espíritu de Reagan. No es necesario comulgar con la ideología socialista para defender la infraestructura pública. Un puerto adecuado revierte en beneficio de los productores y comerciantes del sector privado y un buen sistema de transporte urbano revaloriza la propiedad del suelo a la vez que mejora la circulación. Tal vez los extremistas thatcherianos son los únicos en no aceptar lo que resulta obvio. La cita de *La riqueza de las naciones* mencionada más arriba no requiere mayores comentarios.

En cuarto lugar, sería necesario ocuparse de temas como la calidad de vida y la planificación urbanística. Una vez más, hay que reconocer que la labor de muchos urbanistas ha resultado más perjudicial que beneficiosa. Pero la libertad absoluta de acción nunca podría ser una alternativa válida. En este área se incluyen los parques, las instalaciones deportivas, los auditorios, la restauración de monumentos y un largo etcétera.

En quinto lugar, hay que hablar de los servicios sociales. En este punto conviene recordar que, por ejemplo, fue Bismark quien los introdujo en Alemania, presionado por los socialdemócratas. Quizá los historiadores del futuro atribuyan el notable desarrollo de los servicios sociales en la posguerra a una respuesta ante la amenaza real o imaginaria del marxismo y del comunismo soviético. Un colega soviético lo

expresó así en el curso de una conversación: «La amenaza potencial de nuestra existencia ha sido la causa de que surgiera el capitalismo con rostro humano». Tal vez haya que buscar en la desaparición de esa amenaza el motivo de que la derecha haya comenzado a atacar el Estado del bienestar. La educación, la sanidad, las pensiones y otros servicios sociales deben proporcionarse porque son necesarios, y no porque ofrezcan la posibilidad de obtener beneficios. No hay duda de que en ocasiones la mejor forma de proporcionarlos puede ser a través de contratas privadas. Así, por ejemplo, la construcción de una escuela pública puede encargarse a una empresa privada, del mismo modo que el municipio de París utiliza fondos públicos para pagar a una empresa privada que se encarga de la limpieza de la ciudad. El punto esencial es que todos estos aspectos son de responsabilidad pública y que debe dejarse a la iniciativa local la forma de organizarlos. Los thatcherianos, sin embargo, pretenden obligar a todas las ciudades británicas a organizar sus servicios a través del sector privado, sin prestar atención a la opinión local ni a la calidad y dedicación de los empleados actuales.

Otra cuestión importante es lo que los economistas denominan el problema del «jugador de futuros». Por citar un ejemplo, las empresas privadas tenderán a no proporcionar una formación técnica suficiente a sus empleados ante el peligro de que, una vez preparados, otra empresa se los «robe».

Asimismo, hay que considerar el tema de los «monopolios naturales» —agua, electricidad, gas, y en la mayoría de los países el sistema de correos y teléfonos, así como el transporte público urbano— donde la competencia no es funcional ni deseable, pues para aumentar los beneficios sólo puede recurrirse a un aumento de los precios o a una disminución de la calidad del servicio. Estos sectores, aun siendo de propiedad privada, siempre han estado sujetos al control de un organismo público; por ejemplo, en Estados Unidos, al de la U.S. Interstate Commerce Commission. Puede argumentarse que estos sectores deben considerarse afines a la infraestructura, pues su ámbito de influencia es muy amplio y sirven a un interés público o social definible que debe trascender la mera rentabilidad. Las oficinas de correos rurales no dan dinero, como tampoco lo da el metro de Nueva York.

Por todo lo expuesto, considero esencial que los socialdemócratas actuales sepan reconocer que el mercado y la competencia deben predominar en la producción de la mayoría de los bienes y servicios. ¿Equivale esto a promover la privatización de todos los sectores competitivos orientados al mercado? No puede responderse a esta pregunta sin una reflexión previa. Por ello, vamos a examinar ejemplos existentes de empresas públicas eficaces e ineficaces y analizar los motivos de su buen o mal funcionamiento. Es obvio que, en unas condiciones de escasez crónica como las que existían en el «Este», los

monopolios estatales carecerían de incentivos para funcionar con eficacia y servir al cliente. Pero si se declara la libertad de precios —salvo en el caso de los monopolios naturales, donde siempre están regulados— y se permite la libre competencia, ¿por qué iba a haber escasez? Creo que nada impediría que las empresas de propiedad pública o cooperativa (o autogestionadas) compitieran libremente y el cliente tuviera libertad de elección.

Por último, es necesario ocuparse del problema del equilibrio global y del desempleo. Los economistas occidentales pueden agruparse en dos categorías: los que creen que el sistema posee mecanismos internos de equilibrio que funcionan siempre que el Estado no interviene, y los que creen que el sistema no puede equilibrarse por sí solo. La mayoría de los socialdemócratas, como también los keynesianos, pertenecen a la segunda categoría. Rechazan la explicación de Friedman de la Gran Depresión (a la que él llama «la gran contracción», de la oferta monetaria) y sostienen que los mercados laborales no se «sanean» simplemente permitiendo que bajen los salarios. La creación de puestos de trabajo requiere realizar inversiones, y el mero hecho de que haya demanda de empleo no es incentivo suficiente para movilizar las inversiones privadas. Gran Bretaña nos ofrece un ejemplo reciente; ha habido un *boom* en la construcción de edificios de oficinas, pues muchos especuladores del suelo tenían la «expectativa racional» de obtener beneficios; pero la competencia fue excesiva y no se consiguieron beneficios; muchos se arruinaron, las constructoras despidieron a buena parte de sus plantillas. Podría pensarse que ésta era una ocasión adecuada para realizar inversiones públicas compensatorias, para emplear parte de esa mano de obra y de ese equipo fuera de servicio. Sin embargo, el gobierno británico ha prohibido que las autoridades locales utilicen el dinero proveniente de la venta (obligatoria) de las viviendas sociales para construir nuevas viviendas, pese al creciente problema de «los desahuciados». Esta estrategia política tiene en parte una fundamentación ideológica y en parte responde a la idea conservadora de la política anti-inflacionaria, uno de cuyos puntos es restringir las inversiones del sector público. Sería razonable pensar que el área de la vivienda requiere un esfuerzo público y privado conjunto, pues la libertad de mercado aplicada a los precios de la vivienda eleva éstos a un nivel inalcanzable para la tercera parte de la clase trabajadora, por no hablar de los pensionistas, en la mayoría de las grandes ciudades, desde Nueva York y París a Estocolmo y Budapest. El Estado debería tomar cartas en el asunto para influir en la política de inversiones y en la política regional.

Los ejemplos citados hasta ahora sirven para ilustrar el reformismo del Estado del «bienestar». Y es este tipo de reformismo el único que consigue y conseguirá un buen respaldo electoral... *a no ser que se produzca una crisis de grandes dimensiones, comparable a la Gran Depresión de comienzos de los 30. Sólo una grave crisis, o un desastre*

ecológico, llevarían a la ciudadanía a plantearse la necesidad de buscar una alternativa al sistema que conocen y que tantos beneficios materiales ha reportado a la mayoría. No es mi deseo vaticinar acontecimientos tan negativos, pero en estas áreas, como en la del futuro desarrollo de la revolución científico-tecnológica (y sus efectos en el empleo y en tantos otros campos), sólo cabe esperar lo inesperado.

* Alec Nove, *La economía del socialismo factible*. Editorial Pablo Iglesias. Madrid, 1987.
